

## ACCIONES AFIRMATIVAS DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 2014

**RESUMEN:** INTRODUCCIÓN; PRECISANDO CONCEPTOS; IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO; PRIMEROS ESFUERZOS; DATOS DUROS: UNA REALIDAD; ACCIONES AFIRMATIVAS: MEDIDAS; ACCIONES AFIRMATIVAS DE GÉNERO EN LA REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL 2014; A MANERA DE CONCLUSIÓN.

### INTRODUCCIÓN

El pasado 10 de febrero y 23 de mayo del presente año 2014, México vio nacer un nuevo marco constitucional y de leyes secundarias en materia político-electoral, que tienen enmarcadas una serie de preceptos que buscan entre otras cosas acciones afirmativas de género, para lograr la paridad en los cargos de elección popular entre hombre y mujeres.

Al respecto, habrá que referir que diferentes han sido los esfuerzos de grupos de féminas para lograr que los gobiernos en turno implementen políticas públicas que vayan encaminadas a disminuir la brecha existente entre los géneros.

Ante tales esfuerzos, el derecho electoral mexicano, no ha sido ajeno, y tanto en criterios jurisprudenciales, como en resoluciones jurisdiccionales los tribunales electorales han obligado en diferentes casos a partidos políticos y autoridades administrativas, a reconocer derechos políticos electorales del género femenino. Así muchas mujeres han logrado acceder a cargos de elección popular, como consecuencia de dichas sentencias.<sup>1</sup>

Como resultado de ello, se ha legislado y se ha logrado cuotas en la normatividad electoral, observando como estas cuotas han variado entre el 40/60; 30/70, hasta llegar hoy día al 50/50.

Sin pasar por alto antecedentes históricos que ha vivido nuestro país en temas de equidad de género y que nos han llevado a lo que tenemos hoy en la normatividad

---

<sup>1</sup> Véase como ejemplo SUP-JDC-461/2009; SUP-JDC-12624/2011; SUP-JDC-1658/2012; SUP-JDC-3003/2012 y acumulados; SUP-JDC-61/2013; SUP-JDC-92/2013; SUP-JDC-832/2013 y acumulados; SUP-JDC/1080/2013 y acumulados; SUP-JDC-3/2014, entre otros.

como una acción afirmativa que busca obligar en muchos de los casos a que los partidos políticos, candidatos independientes, autoridades electorales administrativas, garanticen a las mujeres su acceso efectivo a cargos de elección popular, no solo en el ámbito federal, sino en el local, siendo en el proceso electoral que esta por iniciar en unos meses, donde será el laboratorio electoral que en materia de paridad de géneros habremos de ver si dio resultado la reforma que se comenta.

Al respecto identificamos diversos numerales que tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como la Ley General de Partidos Políticos, contienen en el marco de acciones afirmativas encaminadas a lograr tal cometido, es decir el acceso real de mujeres en cargos de elección popular.

## **I.- PRECISANDO CONCEPTOS**

Variados son los conceptos que en torno al tema de genero, paridad, equidad, etc., se han dado en los últimos tiempos, al respecto consideramos pertinente dejar asentado algunos de ellos, a manera de evitar confusiones en el presente artículo.

El concepto de género y equidad de género, se encuentran definidos en el artículo 6 de la Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, misma que tomaremos como referencia, para éste artículo.

**Género**, categoría que se refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

**Equidad de Género**, concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política cultural y familiar.

**Perspectiva de Género**, se conceptualiza, conforme a la **Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**, artículo 3o., fracción XII, de la siguiente manera:

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.<sup>2</sup>

**Movimiento feminista**, entendido como el que se refiere a “todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo y género” (Castells, C: 1996, 10).

**Sexo**, las primeras referencias las encontramos en el idioma castellano en el siglo XV remite a la división de los seres orgánicos en macho y hembra, sentido que, en parte, se conserva hasta hoy, aunque también se suele aplicar a las cualidades que los distinguen. Es una palabra que en sus orígenes remitía exclusivamente a la reproducción, pero que luego se fue extendiendo a otras áreas tales como las prácticas sexuales y algunas formas de vinculación. Por esto, los múltiples contextos en que se la usa y sus derivados (sexual, sexuado, sexos) arrastra tantos significados que la palabra se ha vuelto imprecisa. (Ricardo Doranti: 2011)

Pero podríamos limitar esta multiplicidad de significados a dos grandes grupos: el sexo como característica biológica, que remitiría a la diferencia sexual anatómica. Es el significado más restrictivo y que deriva de la significación original. En estos términos deberíamos hablar de macho y hembra en vez de hombre o mujer (y mucho menos de masculino o femenino). En este sentido nos limitamos a la genitalidad el sexo como

---

<sup>2</sup> Ver tesis 1a. XXIII/2014 (10a.) Publicada en el SJF el 7/feb/2014 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. Tesis: 1a. C/2014 (10a.) Publicada en el SFJ el 7/III/2014 ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Tesis: 1a. XCIX/2014 (10a.) Publicada el 7/III/2014 ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

comportamientos eróticos, entendiendo como tales a aquellos actos en que se ponen en juego elementos ligados, en mayor o menor medida, con la genitalidad. (Ricardo Doranti: 2011)

**El género**, podemos decir que es construido por nosotros la sociedad, en el cual de acuerdo a la cultura de cada pueblo le asignamos a cada hombre/mujer determinados roles, así unos van al campo, otras realizan quehaceres domésticos, unos salen a trabajar, otras se quedan en casa a cuidar de los niños y el hogar, es decir son estereotipos construidos por la sociedad. Según Butler, sería una interpretación cultural del uso de los cuerpos. Al ser el género una construcción histórica y social, no aparece en forma pura sino que está atravesado por otras variables, como la orientación sexual, la clase social o la raza (Butler 1990)

**Las cuotas**, —una forma de medidas especiales de carácter temporal— se refieren a un porcentaje (ya sea de postulación, presencia o participación) que debe asignarse a un grupo específico, por ejemplo, a las mujeres. (Artículo 219 del derogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales)

**La paridad**, en cambio, implica una distribución igualitaria en la que las mujeres y los hombres obtienen cada uno 50% de las candidaturas o cargos. (Artículo 232º, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Producto de un movimiento constante de mujeres, se logra que se reconozca en la normatividad electoral vigente la paridad entre los géneros, con diferentes candados para lograr su afectividad en la práctica, hoy ésta enmarcada en la ley, ahora con el afán de pasarlo al plano concreto.

Como observamos son diferentes conceptos que se han acuñado en torno al tema de genero, en ellos se busca dejar precisado que los géneros tienen igualdad de derechos y que deben en consecuencia ser tratados bajo ese esquema no solo en la ley, sino en el quehacer cotidiano de toda sociedad.

## II.- IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

Abordar el tema de igualdad y equidad de género, resulta de fundamental importancia por el impacto que presenta en el desarrollo de hombres y mujeres, así como de sociedades más justas y respetuosas de la dignidad humana.

El ámbito internacional se ha ocupado en buscar los medios para que todos los países garanticen la equidad de género y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Al respecto, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales obligando a todas y cada una de las autoridades de nuestro país a velar y respetar por la equidad de género en los diversos espacios en los que se desarrollan.

En este sentido, vamos a iniciar abordando la definición que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“Igualdad de género”, n.f.), sobre lo que es equidad de género, y señala:

Es una estrategia para lograr la igualdad entre los sexos a través de la justicia. Partiendo de la diferencia en oportunidades y derechos surgida de la asignación de roles sociales, establece mecanismos de compensación para lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades; acceso equivalente a los recursos, beneficios y servicios del Estado, y alcancen una distribución equilibrada de poder.

Como se observa de lo anterior, la equidad de género constituye un medio por el cual se pretende lograr la igualdad de los sexos a través de la justicia. Como bien sabemos ante la ley todos los seres humanos son formalmente iguales, sin embargo, la biología impone diferencias que en mucho de los casos han sido utilizadas para justificar tratos desiguales, bajo el argumento de que por naturaleza, según su sexo, las personas deben ser tratadas de diferente manera, reconociendo la igualdad ante la ley en virtud del sexo de quien ejerce sus derechos.

Serrano, señala que la igualdad de género y los derechos políticos de la mujer han sido dos de los temas fundamentales que han servido, en el plano internacional, para avanzar en la igualdad formal y sustantiva de la mujer. A pesar de los significativos

avances que se han impulsado mediante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir de la Carta de las Naciones Unidas, el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer se vio impedido por concepciones tradicionales respecto de su papel en la vida privada, así como por la aparente neutralidad con que el derecho de los derechos humanos fue elaborado (Serrano 2009: p. 19).

Las mujeres iniciaron su lucha por la obtención de igualdad justamente mediante los derechos políticos. Su participación en la esfera pública debía ser tan reconocida como en la privada, lo que se plasmó en las primeras convenciones sobre el derecho al voto de las mujeres. Posteriormente, la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, representó un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación en cualquier ámbito, así como de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación, especialmente aquella originada en patrones culturales, sociales e históricos. Aunada a esta tendencia, también se encuentra la reinterpretación de los tratados internacionales generales para eliminar la neutralidad de las normas y reconocer las diferencias que de hecho existen entre hombres y mujeres, de tal forma que todas las personas pudieran gozar y ejercer plenamente sus derechos fundamentales. (Serrano, 2009: p. 19-20).

De esta manera los derechos políticos de la mujer, obtienen gran relevancia al volverse medios que aseguran la participación de la mujer en la toma de decisiones, facilitando la construcción de un nuevo liderazgo y pensamientos políticos y sociales cuyo ejercicio contribuya a eliminar la distinción en los ámbitos privado y público que tanto ha afectado el reconocimiento de los derechos de la mujer y su desarrollo.

Señala Álvarez, Rosa María (2011. p. 17) que a partir de la firma y ratificación por México de la convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación en Contra de la Mujer, se han abierto nuevas perspectivas para la consolidación de un marco jurídico, que permita una nueva ruta democrática para la valoración social y cultural de las mujeres, en el que se despoje de todo aquello que provoque su discriminación y su exclusión de la vida social del país.

En este sentido, el principio de igualdad dentro de la democracia tiene diversas implicaciones, pues no solo consiste en que las políticas gubernamentales atiendan a las personas por igual, sino que además se tiene que crear las oportunidades que conduzcan a la formalización de aquél trato igualitario, por lo que el reconocimiento de los derechos de las mujeres está íntimamente relacionado con la necesidad de desarticulación de relaciones y prácticas autoritarias, y con la generación de procesos de democratización al interior de todos los grupos y sectores sociales, empezando por la familia. Ante ello, hoy vemos como medida provisional un marco normativo regulatorio que busca precisamente eliminar la brecha existente entre los géneros que hoy es reflejo en México.

### **III.- PRIMEROS ESFUERZOS**

Los derechos del hombre y del ciudadano que proclamaba la Revolución Francesa, conocida en el constitucionalismo como la “hora inaugural” del Estado Constitucional se referían literalmente al *hombre* y por tanto las mujeres no participaron de este reconocimiento, pues su condición de mujer no la hacía partícipe de las prerrogativas que ahí se consignaron y menos aún se les consideró susceptibles de obtener la ciudadanía. La falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres en los primeros documentos universales de derechos no han tenido que ver con sus participación en las luchas sociales que les dieron origen, sin duda las mujeres libraron con los hombres las mismas batallas por mejores condiciones de vida, no obstante, su papel social, evidentemente disminuido, determinó para ellas reconocimiento diferente en la construcción de derechos. (Álvarez: 2011, p.19)

Sin embargo, el movimiento feminista ya venía con fuerza, y a las mujeres revolucionarias se unieron intelectuales ilustrados, así tenemos que dos de los más distinguidos impulsores de la Enciclopedia fueron también feministas, uno de ellos D’Alembert, pues aunque este destacado matemático, filósofo e intelectual no llegó a ver culminada la Revolución francesa, sostuvo una interesante polémica con Rousseau, precisamente a causa del desprecio hacia las mujeres de este último. En una carta que envió al autor de: El contrato social, D’Alembert contradice punto por punto las nociones

que Rousseau arguye para negarle a las mujeres todos los derechos y libertades que se reivindican para los hombres. De ahí que D'Alembert afirma que prohibirles a las mujeres acceder a una educación digna y similar a la masculina es un crimen que la sociedad paga con la pérdida de la mitad de sus talentos y condena, con ellos, a la mitad de la población a la corrupción, al vicio y a la esclavitud. (Serret, 2008: p. 21)

Marie-Jean- Antoine Nicolás de Caritat, marqués de Condorcet, tuvo un papel protagónico en la Revolución francesa como defensor de numerosas causas liberales, escribió distintos textos sobre el tema de la reivindicación de la igualdad de derechos para las mujeres, donde advirtió sobre la necesidad de reconocer a la mujer los mismos derechos de los hombres, y destaca por haber publicado a menos de un año de la toma de la Bastilla, el tratado del 3 de julio de 1790, titulado: Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía. (Serret, 2008: p. 22)

En este contexto, la lucha feminista por la igualdad jurídica entre mujeres y hombres ha sido una lucha lenta, con diversos tintes que oculta la opresión y discriminación contra la mujer, y cuya prohibición tiene que ser consagrada necesariamente en los textos constitucionales, al respecto Ferrajoli en (Álvarez, 2011, p. 22) señala:

Históricamente todos los derechos fundamentales han sido sancionados en las diversas cartas constitucionales, como resultado de las luchas o revoluciones que, en diferentes momentos, han rasgado el velo de normalidad y naturalidad que ocultaba una opresión o discriminación precedente: desde la libertad de conciencia a las otras libertades fundamentales, desde los derechos políticos a los derechos de los trabajadores, desde los derechos de las mujeres a los derechos sociales. Estos derechos han sido siempre conquistados como otras tantas formas de tutela en defensa de sujetos más débiles, contra la ley del más fuerte – iglesia, soberanos, mayorías, aparatos policiales o judiciales, empleadores, potestades paternas o maritales- que regían su ausencia.

Así tenemos que el reconocimiento de la igualdad jurídica de hombres y mujeres a nivel mundial se da formalmente hasta 1975, a partir de entonces, las Constituciones de diversos países, se fueron constituyendo como garantes de los derechos del hombre y mujeres.



Sin embargo pese al reconocimiento formal de la igualdad de hombres y mujeres, los esfuerzos de los países siguen, con el fin de alcanzar plenamente las condiciones de paridad de género, a través de la implementación de diversas acciones que reivindiquen a aquéllos grupos que han sido menos favorecidos. Veamos en concreto el caso de México.

### **III.a. México**

Como se ha visto, una de las primeras luchas de las mujeres era lograr la ciudadanía, y en México fueron varias las etapas que se vivieron para obtener el derecho de la mujer para votar y ser votada en las elecciones a cargos de elección popular.

En este contexto, si bien la Constitución de 1917 no restringió de manera expresa los derechos políticos de las mujeres, la interpretación que se hizo del término ciudadano dio como resultado que la Ley Electoral para Poderes Federales de 1918, señalara en su artículo 37 como electores a “todos los varones mexicanos mayores de 18 años si son casados y de 21 si no lo son”, regulación que retomó la Ley electoral de 1946 en su artículo 40, volviendo a restringir esos derechos a las mujeres. No obstante, tal y como sucedió con la figura del Amparo, a nivel estatal los movimientos a favor de las mujeres comenzaron a dar sus frutos, trayendo como resultado que en varios de ellos se les reconociera el derecho ciudadano al voto: Yucatán, 1922; Chiapas, 1925; Puebla, 1936; Sinaloa, 1938; Hidalgo, 1948. Estas entidades dieron un paso adelante a la reforma constitucional de 1947 mediante la cual se modifica el artículo 115 que reconoció el derecho al voto de las mujeres en las elecciones municipales, es decir una ciudadanía restringida y que aparentemente buscó ensayar la participación de la mujer en esta materia. (Álvarez, 2011: p. 26)

Manuel González Oropeza, en la conferencia como parte del Aniversario del voto femenino en México (2012), recordó que fue durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas del Río cuando se presentó en 1937 una iniciativa para que, mediante la reforma al artículo 34 constitucional, se reconociera la igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara su participación política; dicha iniciativa fue recibida con resistencia por parte de algunos diputados, y después de muchas negociaciones y pese a que las

Legislaturas locales enviaron sus votos, la propuesta no prosperó. Es por ello que el voto femenino como ya se mencionó se otorgó primero en el ámbito municipal hacia 1947 por iniciativa del presidente Miguel Alemán, y de manera posterior en el federal, para obtener, finalmente, la tan anhelada reforma federal en 1953, reconociéndose hasta entonces los derechos políticos de la mujer, a través de la reforma de los artículos 34 y 115; condición indispensable para un sistema realmente democrático y justo.

De acuerdo a los antecedente encontrados el voto de la mujer en México, abría de concretarse siendo el presidente de la república Ruiz Cortines, quien el **17 de octubre de 1953**, promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal.

El tema de la mujer se volvió a atender en México debido a que nuestro país sería sede en 1975, de la primera Conferencia Mundial sobre la mujer, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, el 31 de diciembre de 1974 se reformaron los artículos 4º, 5º, 30º y 123 de la constitución y se estableció de manera literal la igualdad entre varón y la mujer, al lado de la protección, organización y el desarrollo de la familia. (Álvarez, 2011: p. 26)

En el 2001, el artículo 1º constitucional, prevé la prohibición de la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A partir de entonces, y debido a los compromisos internacionales adquiridos, nuestro país ha recogido tanto, en la Constitución como en diversas leyes los postulados que establecen los instrumentos internacionales que ha firmado, como los son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), su Protocolo Facultativo, y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, firmada en Belém do Pará, Brasil (Convención de Belém do Pará); la recepción de ese derecho internacional se ha traducido en reformas a la

constitución, y gradualmente al resto de la legislación, tanto federal como local, en seguimiento al proceso de armonización que deben llevar las mismas.

En la última década, en nuestro país las leyes sobre el tema de la igualdad de género se han incorporado al sistema jurídico mexicano, consolidando un marco jurídico que marca pautas para realizar cambios y fortalecer instituciones que tengan como referente principal la garantía del derecho a la igualdad y la no discriminación, en particular por sexo: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2 de agosto de 2006; Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 1º de febrero de 2007; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 11 de junio de 2003; Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 12 de enero de 2001; y el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que no está enmarcado como una ley en concreto, sin embargo busca como acción afirmativa, juzgar con perspectiva de género.

Actualmente y como hemos venido mencionando, tenemos como acciones afirmativas de género la reciente reforma electoral tanto al marco constitucional como a leyes secundarias, que buscan en temas relacionados con cargos de elección popular, que partidos políticos, autoridades administrativas y jurisdiccionales, unos por un lado que postulen con paridad a hombres y mujeres y a las autoridades que sean garantes de que se hagan efectivos tales derechos. Marco jurídico del que nos ocuparemos oportunamente en la presenta investigación.

#### **IV.- DATOS DUROS: UNA REALIDAD**

A pesar de las medidas adoptadas por el estado mexicano, y la suscripción y ratificación en el ámbito internacional de diversos acuerdos, el diagnóstico de género presentado en octubre del 2013 por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, en el marco del 60 aniversario del voto de la mujer en nuestro país, a partir de los cargos públicos ocupados tanto por las mujeres como por los hombres, refleja que en México todavía no vivimos una sociedad equitativa que brinde igualdad de oportunidades laborales para ambos sexos.

El diagnóstico está dividido para su análisis en los tres Poderes de la Unión, en otros órdenes de gobierno como son los Estados de la Federación, las presidencias municipales y el caso representativo de la Asamblea Legislativa del DF. También se consideraron a otros ámbitos como son los Organismos públicos autónomos, la iniciativa privada, y las principales universidades del país.

Quince fueron las instituciones observadas para este diagnóstico: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretarías, Subsecretarías y Dependencias del Gobierno Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, ejecutivos estatales, presidencias municipales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Instituto Federal Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información, cámaras de comercio, líderes empresariales y las 27 universidades más emblemáticas de México.

A continuación los resultados que arrojó el Diagnóstico Equidad en las Instituciones Mexicanas (2013):

En la Cámara de Diputados, de 500 legisladores, 187 son mujeres, lo que representa un 37%. Por su parte, actualmente tenemos 44 senadoras de un total de 128 curules, es decir 34%.
De 18 Secretarías de Estado, sólo 3 son encabezadas por mujeres. Y de 51 Subsecretarías, apenas el 20% son ocupadas por mujeres, dando un total de 10 subsecretarias.
Al hablar de diversas dependencias de gobierno, como lo son los institutos o las comisiones, de un total 55 dependencias observadas, sólo 11 tiene como cabeza a una mujer.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sólo dos ministras, de los 11 posibles; mientras que en el Consejo de la Judicatura Federal, de los 6 consejeros actuales no hay ni una mujer.
Igualmente ningún estado de la República cuenta con una mujer como titular, y

en cuanto a las presidencias municipales, el 93% son encabezadas por hombres: es decir, de 2,456 alcaldías, sólo 169 son alcaldesas.
La Asamblea Legislativa del DF, tiene la misma tendencia que el Congreso de la Unión al contar con 22 diputadas locales, lo que representa un 33%.
De los nueve consejeros del IFE, sólo dos son mujeres.
Resalta el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información, al ser el <b>único organismo</b> donde la mayoría de sus integrantes son del sexo femenino, contando con 3 comisionadas de los cinco posibles.
Referente a la iniciativa privada, con base al ranking de los 100 empresarios más importantes de México presentados por la revista Expansión, en la lista sólo destacan dos mujeres, lo cual representa apenas el 2%. En cuanto a las cámaras de comercio, de 14 cámaras ninguna está representada por una mujer.
Finalmente, de las 27 universidades más representativas de nuestro país, sólo el Instituto Politécnico Nacional está encabezado por una mujer. <sup>3</sup>

Como observamos, las estadísticas demuestran que aún existe largo camino que recorrer al respecto y a partir de estos datos la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC., (2013) ha precisado que “las cuotas de género, (donde se pretende obligar a un cierto número femenino garantizado para diversos puestos), **no necesariamente son la panacea que favorecerá la igualdad de oportunidades para las mujeres, pues ésta debe recaer en sus capacidades y no en una simple cuestión de cuotas**; también es cierto que aún falta un gran camino por recorrer para que los derechos políticos de las mujeres para acceder a puestos de gran responsabilidad en nuestro país sea una realidad plena”.

Definitivamente coincidimos en que no es una cuestión de cuotas, es menester preparación, capacidades, talento, mismas que sin duda existen, solo será necesario ir trabajando en ello, para lograr la efectividad tan anhelada.

<sup>3</sup> Fuente Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC

Pero entretanto eso sucede, estamos en el marco de una reforma electoral reciente que busca disminuir la brecha existente y dar al género vulnerado, mejores perspectivas de igualdad, con acciones afirmativas, esperemos temporales.

## **V.- ACCIONES AFIRMATIVAS: MEDIDAS**

Como parte de las estrategias que el Estado ha destinado para establecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se han instaurado las llamadas acciones afirmativas, con el fin de compensar las discriminaciones que han sufrido las mujeres, resultantes de las interacciones sociales.

Las acciones afirmativas de género ha sido definida por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 2 de agosto de 2006, como el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.

Dieter Nohlen (2006, p. 13), define a la acción afirmativa como: “la designación de las medidas jurídicas y de hecho para dar un tratamiento privilegiado a ciertos grupos de la población, con el objetivo de superar las desigualdades, existentes a pesar de la igualdad formal (igualdad en la ley)”

Las citadas, constan de características peculiares, siendo la principal la temporalidad, lo anterior, con el fin de no crear nuevos escenarios de desventaja hacia ciertos grupos, ya que las mismas constituyen un trato diferenciado que tiene por objeto que los miembros de un grupo específico, insuficientemente representado, alcancen un nivel de participación más alto, a efecto de generar condiciones de igualdad.

Señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las cuotas de género son medidas especiales de carácter temporal o distinciones en el trato legal, con carácter objetivo, razonable y proporcional, dictadas con el propósito de incrementar la

participación de las mujeres en los ámbitos de decisión para remediar legalmente las desventajas de facto que las mujeres han enfrentado para acceder a éstos.

#### **a. Antecedentes**

Las acciones afirmativas, en relación a la amplia gama de discriminaciones que se busquen corregir: raciales, étnicas, de género, grupos de edad; se pueden desarrollar en muy diversos ámbitos, con el objetivo de reivindicar la condición humana y el derecho a ser igualmente libres y dignos.

El término de acciones afirmativas, fue acuñado por John F. Kennedy en su orden del 6 de marzo de 1961, cuando al crear una Comisión para promover la igualdad de oportunidades en el empleo estableció programas de financiamiento federal hacia los empleadores, con la obligación, a cambio, de “tomar acciones afirmativas” en la liberación de cualquier prejuicio racial en la contratación y el empleo. Posteriormente, Lyndon B. Johnson explicó en un discurso ante la Universidad Howard, cuyos estudiantes son afroamericanos, el 4 de junio de 1965, que la igualdad no se logra a través de declaraciones abstractas, sino a través de oportunidades concretas. (González, 2007, p. 27)

Es así como las acciones afirmativas, surgen en países como Estados Unidos en los ámbitos laboral y estudiantil con cuotas de ingreso para los y las estudiantes negras en las universidades. Así mismo hay experiencias como las de Noruega, donde las mujeres afiliadas al partido socialdemócrata promovieron y consiguieron una resolución que obligó al partido a presentar candidaturas femeninas en las listas de aspirantes a la representación parlamentaria, logrando al tiempo que ese requisito se extendiera al resto de los partidos políticos. O experiencias como la de México, donde un grupo de mujeres mexicanas acudieron a las autoridades jurisdiccionales para obligar a los partidos políticos a que las postularan en igualdad de condiciones a la de los hombres en cargos de elección popular y que se le conoce como “Caso Juanitas”.

**b. Acciones afirmativas de género en los sistemas electorales.**

El avance lento en el acceso de las mujeres a los cargos públicos de elección popular, ha propiciado la atención de los países y de las diversas organizaciones internacionales con el fin de idear estrategias que coadyuven al desarrollo y liderato de la mujer en las políticas públicas de los estados.

De esta manera las cuotas de género conforman aquellas acciones afirmativas que en materia política se han incorporado a los sistemas electorales con el fin de compensar y aumentar el acceso de las mujeres a los organismos encargados de la toma de decisiones.

La representación de la mujer en el ámbito político ha sido un esfuerzo constante para superar costumbres, tendencias y resistencias; y busca abrir la posibilidad de su participación más allá de los espacios públicos tradicionalmente reservados. En este concreto ámbito, las mujeres han enfrentado la resistencia cultural que tiene su repercusión en el derecho. Para revertir estas tendencias, algunas normas jurídico-electorales han ido previniendo mayores espacios para la participación de la mujer y frenetizando un porcentaje determinado de cuotas que asegure, en principio, la participación activa y directa de la mujer en los cargos de elección popular. (Aparicio, 2011, p. 7)

El ámbito más conocido sobre las acciones afirmativas se refiere a las estrategias para reducir hasta eliminar la discriminación de las mujeres en la política formal, sin embargo las mismas pueden ser utilizadas para favorecer el acceso de grupos marginados a posiciones de poder, puestos de trabajo sitios en las universidades, puestos directivos en sectores privados y públicos entre otros.

Señala Serret y Méndez (2011, p. 50) que establecer cuotas, lejos de favorecer la reproducción de una baja autoestima o una subvaloración de sus pretendidos beneficiarios como afirman sus críticos, ofrece la posibilidad de ir cambiando sus propios parámetros de identidad a aquellas personas que nunca han tenido referentes de gente semejante en puestos de poder.



Las cuotas de género se han vuelto una herramienta política importante para aumentar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular, sin embargo estas medidas de cuotas de candidatos ya sean obligatorias o voluntarias, **sólo ofrecen a las mujeres la oportunidad de postularse para una elección, pero no garantiza la elección de las mujeres**, pues el resultado final depende de los votantes. Por lo anterior se dice que las cuotas de género funcionan mejor en los sistemas electorales de representación proporcional. (Ballington, 2008, p. 26)

Ballington, en el estudio sobre mujeres y hombres en los parlamentos (2008, p. 26), que en contraste a lo anterior hay países como Tanzania y Uganda, que implementaron los sistemas de cuotas de escaños reservados, en el que se establecen un número o porcentaje mínimo fijo de mujeres que serán elegidas, en ocasiones, pero no siempre junto con escaños reservados para grupos étnicos o minorías religiosas. Los escaños reservados son de muchas formas, algunos definen un electorado especial que elegirá cierto número de mujeres parlamentarias, como en Uganda y Rwanda; otros brindan un voto adicional a los votantes por una lista solo de mujeres, como en Marruecos, o reservan ciertos distritos electorales para los candidatos mujeres como en India a nivel local.

La implementación de cuotas en los distintos países de América Latina, se ha asumido como una de las medidas principales para promover el acceso real de las mujeres en el mundo de la política, y es a partir de los años noventa, fecha que coincide con la aprobación de acuerdos internacionales, y en concreto la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas de Beijing en 1995, que las cuotas se adoptaron en un gran número de países latinoamericanos. Entre 1991 y el año 2000 países latinoamericanos como Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, entre otros, aprobaron leyes para el establecimiento de cuotas para la participación de las mujeres en las elecciones legislativas, que oscilan entre el 20 y el 40%. Hoy México le esta apostando en resientes reformas a la paridad, es decir al 50/50 en postulaciones.

Las cuotas constitucionales se ubican a nivel del ordenamiento más relevante del país o entidad de que se trate y usualmente se desagregan en las leyes electorales, estableciendo obligaciones y sanciones para los partidos políticos y los órganos electorales que no pueden ser obviadas, como la cancelación de los registros partidarios, multas, cancelación de listas de candidatos, etc. Algunos partidos se han impuesto en sus estatutos la obligación de postular a cuotas establecidas de mujeres dentro de sus listas o número de candidatos, reduciendo la sanción únicamente a los órganos partidarios, pero no necesariamente en términos formales. (López, 2009, p. 328)

En México en el año de 1993, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), a manera de recomendación señalaba que los partidos políticos deberían promover en los términos que determinaran sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular. En 1996, se modifica el COFIPE señalando que los partidos políticos debían considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70 por ciento para un mismo género.

No obstante, es en 2002 donde establece por primera vez una cuota máxima de 70% para candidatos propietarios de un mismo género, se estableció un orden en la lista de candidatos plurinominales, de modo que las mujeres aparecieran por lo menos en una de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista; y se fijaron sanciones ante el incumplimiento de cualquier partido político. Posteriormente en 2007, se incrementó la cuota mínima de treinta hasta al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad; asimismo, las listas plurinominales deberían de incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos.

Así llegamos a la última reforma político electoral de nuestro país impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto (como parte del pacto por México), donde se introduce por primera vez en el artículo 41 constitucional, la obligación de los partidos políticos de

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales; logrando de esta manera nuestro país poner las vías a través de las cuales podremos caminar a una igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en tratándose de estos temas.

De esta forma, las acciones afirmativas en materia político electoral, establecidas a favor del género que se encuentra en minoría, otorga una orientación democrática a las elecciones en la medida en la que se garantice el acceso equitativo, de ambos géneros, a las candidaturas a cargos de elección popular.

La introducción de acciones afirmativas como las cuotas de género siguen siendo las estrategias más relevantes para la promoción de la inclusión de las mujeres en espacios de calidad para la toma de decisiones. Sin embargo su efectividad es parcial y temporal, pues en la medida en que se van consolidando, generan otro tipo de desigualdades que pueden ser contraproducentes para los logros obtenidos a partir de la instauración de las cuotas. (López, 2009, p. 339)

## **VI.- ACCIONES AFIRMATIVAS DE GÉNERO EN LA REFORMA POLITICO-ELECTORAL 2014**

Nuestro máximo documento normativo, la Constitución Política, ha referido en la reforma del pasado 10 de febrero del presente año 2014, en el artículo 41- base I, segundo párrafo, entre otras cosas que los partidos políticos deberán establecer:

“las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.

Para que ésta reforma Constitucional se diera en México, se tuvieron que dar diferentes movimientos sociales y políticos por grupos de mujeres que exigían igualdad entre los géneros. Movimientos que en más de una ocasión llegaron a los Tribunales y ocasionaron a su vez que fueran órganos jurisdiccionales los que tomaran la decisión de obligar a los partidos políticos y en muchos casos a las propias autoridades administrativas a dar efectividad a la participación de las mujeres en concreto a la vida política de su comunidad.

En adelante transcribimos una serie de artículos que hoy se encuentran normados tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE), como en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP) y que son acciones afirmativas de género que dieron vida a que ambas leyes secundarias a partir del 23 de mayo del presente 2014, normaran la paridad de género con mejores garantías de las que habían incluido normas anteriores, entre ellas el COFIPE.

Posteriormente, realizaremos algunos comentarios con la finalidad de dejar asentado lo que consideramos debe ser la medida adoptada.

Así en la LEGIPE, diferentes numerales establecen que:

#### **Artículo 7.**

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y **obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.**<sup>4</sup>

#### **Artículo 14**

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, **los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género.**

5. En el caso de las **candidaturas independientes** las fórmulas deberán estar integradas por **personas del mismo género.**

#### **Artículo 26**

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, **garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad**, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.

#### **Artículo 232**

2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por **fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género**, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.

3. Los partidos políticos **promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros**, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración

---

<sup>4</sup> Todas las negritas que se emplean en los diferentes numerales, son mías.

del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para **rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad**, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

#### **Artículo 233.**

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, **deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros** mandatada en la Constitución y en esta Ley.

#### **Artículo 234.**

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos **compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género**, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

#### **Artículo 241.**

1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:

- a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán **sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad entre los géneros** establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley;

#### **Artículo 364.**

1. Las fórmulas de candidatos para el cargo de senador, deberán estar integradas de manera alternada por **personas de género distinto**.

Por su parte la LGPP, obliga entre otras cosas a los partidos políticos a respetar y garantizar que la paridad de géneros sea una realidad en sus filas y que se destinen recursos económicos para preparar cuadros de mujeres, etc., así contextualiza que:

#### **Artículo 3**

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y **buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos**, así como en la **postulación de candidatos**.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios **para garantizar la paridad de género** en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

5. **En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.**

#### **Artículo 37-1-e)**

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

e) La obligación de promover la participación política en **igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres**.

**Artículo 51, 1 a) –V**

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del **liderazgo político de las mujeres**, cada partido político deberá destinar anualmente, **el tres por ciento del financiamiento público ordinario**.

**Artículo 73.**

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del **liderazgo político de las mujeres**, en los rubros siguientes:

- a) La realización de **investigaciones** que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;
- b) La elaboración, publicación y distribución de **libros, revistas, folletos** o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;
- c) La organización de **mesas de trabajo**, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política;
- d) La realización de **propaganda y publicidad** relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia.

Este nuevo marco normativo, tanto de la LEGIPE como de la LGPP, busca encaminar acciones afirmativas, que den efectividad en la práctica, pues es ya una obligación para partidos políticos que en ambos principios mayoría relativa y representación proporcional, sus listas garanticen paridad de géneros; también que las candidaturas independientes garanticen la paridad; incluso en pueblos y comunidades indígenas deberán garantizar la participación en condiciones de igualdad de las mujeres; y algo que podría ser un caso frontera, la facultad a las autoridades administrativas federales y locales de rechazar en un momento dado los registros que excedan de la paridad; pero a su vez observamos en tales numerales que en tratándose de coaliciones, éstas también deberán respetar y salvaguardar la paridad en sus postulaciones.

En temas relacionados con los presupuestos, los partidos políticos deberán destinar un tres por ciento para lograr el liderazgo de mujeres, tema que es preocupante hoy día, pues muchos partidos políticos en realidad no tienen cuadros de mujeres, pues sus filas están integradas mayoritariamente por hombres, éste será un verdadero reto para diversos partidos políticos.

Llama la atención en la reforma que comentamos, el hecho de que no deberá existir por los partidos políticos, lo que hemos llamado “**Fraude de Registro**”, es decir que los partidos políticos no deberán por el solo hecho de hacerlo, postular a cargos de elección popular a un género en cualquier distrito electoral, sino que deberán hacerlo en distritos donde en el proceso electoral anterior hayan ganado, donde no tengan en un proceso electoral inmediato cifras en contra, es decir, los registros y postulaciones en la práctica deberán ser en distritos con posibilidades de triunfo, pues se busca que en el ejercicio de cargos de elección popular se dé efectivamente la llegada de mujeres.

Así las cosas, no solo es cumplir con la norma y dar una apariencia de registro, y llegado el momento los congresos locales y el congreso de la unión solo se integre con un solo género, o incluso que un solo género este sobre o sub representado, al postular a las mujeres en distritos con poco margen de triunfo.

Como observamos se percibe una reforma integral, que recogió de criterios jurisprudenciales, de resoluciones jurisdiccionales, de malas practicas de partidos políticos, de órganos administrativos electorales, en fin, de vivencias, las necesidades reales de los géneros e identificó las fallas que se han dado en la práctica.

La reforma está, ahora, tendremos que ver el **laboratorio electoral 2015**, que será los tiempos de los registros y cuando se lleve a cabo la jornada electoral del proceso electoral tanto federal como local que se avecina, para ver si en la práctica resultan las acciones afirmativas de género las medidas más adecuadas.

## **VII.- A MANERA DE CONCLUSIÓN**

Las acciones afirmativas de género han pasado por diferentes contextos, hoy observamos como en México se busca por medio de la norma electoral vigente, que los partidos políticos se obliguen efectivamente a promover la participación de las mujeres en los cargo de elección popular y en sus órganos de dirección.

Esta normatividad político-electoral, tanto en la norma suprema, como en leyes secundarias, ha generado al menos por el momento, una gran expectativa entre las mujeres, sin embargo consideramos que será necesario que en el proceso electoral federal 2014/2015 y los correspondiente procesos locales, se demuestre que la acción afirmativa de género adoptada, es efectiva, que podamos ver quizás menos juicios de ciudadanas (JDC) en tribunales, donde las mujeres tengan que acudir a las autoridades jurisdiccionales para que sean éstas las que obliguen tanto a partidos políticos como a autoridades administrativas, a que respeten los registros en condiciones de paridad de género, pero además que en tratándose de candidaturas independientes de la misma forma sean respetados los registros que se integren por géneros iguales y que incluso en pueblos y comunidades indígenas se les de la oportunidad real a las mujeres de acceder a cargos de elección popular.

Es por ello, que nos atrevemos a decir, que será en éste proceso electoral 2014/2015, tanto el federal como los correspondientes locales, donde podremos constatar que la reforma que se comenta ha dado los resultados esperados, es decir, que la acción afirmativa ha sido efectiva.

Mucho de éstos logros en la reciente reforma político-electoral, tienen como antecedente criterios jurisdiccionales que nuestro Tribunal Electoral, ha resuelto y sostenido respecto de los razonamientos a aplicar en materia de igualdad de género, privilegiando en todo momento las acciones afirmativas de género implementadas en algunos casos por autoridades electorales y otros casos obligando a diferentes actores políticos a respetar las cuotas establecidas en pro de la equidad de género, bajo el amparo de los principios de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad en la



interpretación de las normas, favoreciendo el respeto a las cuotas aplicables para el caso de las candidaturas de hombres y mujeres.

Al respecto, cabe destacar que el criterio de la Sala Superior, ha sido garantizar la acción afirmativa de género, estipulada en nuestra legislación federal, los tratados internacionales, y los códigos electorales de la materia, obligando a los partidos políticos a garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular, aun y cuando los partidos políticos designen a sus candidatos, como resultados de un proceso interno de elección.

Han sido diversas las resoluciones que nuestro máximo tribunal ha atendido, en todas ellas ha privilegiado la equidad de género, sin menoscabar a ninguno de los dos, hoy observamos ya en los textos vigentes la paridad y no la equidad, en ese contexto estamos ahora con el cincuenta-cincuenta, sin duda la medida ha sido bienvenida por el género vulnerado, consideramos como muchos investigadores, que la medida requiere ser temporal y efectiva, ello dependerá en mucho de los actores políticos y de las políticas públicas que al interior de los partidos políticos se implementen para llevar sus cuadros de mujeres a la efectividad de los cargos y poco a poco las futuras generaciones lo verán de forma natural, hasta lograr que no sea necesario plasmarlo en el texto constitucional y en leyes secundarias para su cumplimiento.

Consideramos que la acción afirmativa es oportuna, transitamos en el marco normativo electoral mexicano de la equidad a la paridad y poco a poco a pasos firmes, hasta que ya no sea necesario plasmarlo en leyes. Lograrlo no está en manos solo de las autoridades electorales, de legisladores, partidos políticos o ejecutivos en turno, será una tarea conjunta en donde cada quien deberá asumir la parte que le corresponda.

DRA. ARCELIA GUERRERO CASTRO

Agosto 2014

## BIBLIOGRAFÍA

Alanís M. (2009) et al. Equidad de género y derecho electoral en México. Enrique Ochoa (coord.) México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Álvarez, R (2011) et al. Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo. Héctor Fix-Zamudio y Diego Valedés (coords.) México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Aparicio, F (2011). Cuotas de Género en México. Candidaturas y Resultados Electorales para Diputados Federales 2009. Temas selectos de Derecho Electoral. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Ballington, J. (2008). Igualdad en la Política: Un estudio sobre mujeres y hombres en los parlamentos. Reportes y Documentos No. 54. [Unión Interparlamentaria] Congreso de México (traducc) en: <http://www.ipu.org/pdf/publications/equality08-s.pdf>

Castells, C. Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona, Paidós, 1996

Carbonell, J. y Carbonell, M. (2010). La Construcción de igualdad de género: Estado de Bienestar y Políticas Públicas. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Nohlen, Dieter. 2006. Diccionario de Ciencia Política. México: Porrúa, Colegio de Veracruz.

González, O. (2012). La influencia de los medios de comunicación en la participación de la mujer en la vida del país. [Tribunal Electoral] de: [portales.te.gob.mx/egenero/files/influencia\\_medios.doc](http://portales.te.gob.mx/egenero/files/influencia_medios.doc)

González, O. (2007). Equidad de Género en el Derecho Electoral. Revista Justicia Electoral, Vol. 1, Núm. 1, Tercera Época. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Serrano, S. (2009) et al. Equidad de género y derecho electoral en México. Enrique Ochoa (coord.) México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Serret, E. (2008). ¿Qué es y Para qué es la perspectiva de género?. México: Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

Serret, E. y Méndez J. (2011). Sexo, Género y Feminismo. Colección Equidad de Género y Democracia. Vol. 1. México: SCJN, TEPJF, IEDF.

Diagnóstico sobre la equidad en las instituciones mexicanas a partir de los cargos públicos ocupados tanto por las mujeres como por los hombres (2013). [Comisión Mexicana de Derechos humanos] de:

[http://www.cmdh.org.mx/images/fotosprsm/DIAGNOSTICO%20EQUIDAD%20CMDH%20OCTUBRE%202013%20\(1\).pdf](http://www.cmdh.org.mx/images/fotosprsm/DIAGNOSTICO%20EQUIDAD%20CMDH%20OCTUBRE%202013%20(1).pdf)

Ricardo Doranti, "Diversidad sexual: conceptos para pensar y trabajar en salud", en <http://www.unfpa.org.ar/sitio/archivos/diversidadsexualygenero.pdf>, fecha de elaboración abril 2011, fecha de consulta el 23 de julio, 10:05

Ibarra, J. (2013, enero-junio). Cuota de Género vs. Regla de Mayoría: El debate Constitucional. [Revista Mexicana de Derecho Constitucional] de: <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/28/ard/ard5.pdf>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (derogado)

Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley General de Partidos Políticos.